

**REVISTA CIDOB D'AFERS
INTERNACIONALS 87.**

**PROCESOS DE RECONCILIACIÓN
POSBÉLICA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA**

Conflictos poscoloniales en el Reino
Antankaraña del norte de Madagascar

Laurent Berger

Conflictos poscoloniales en el Reino Antankaraña del norte de Madagascar

Laurent Berger

Chargé de la recherche au Musée de Quai Branly.

Chercheur affilié au Laboratoire d'Anthropologie Sociale-Musée de Quai Branly, Paris

laurent.berger@quaibrantly.fr

RESUMEN

Este estudio de caso presenta los elementos que han entrado en juego y las estrategias políticas que han regido el desarrollo conflictivo de una negociación relativa a las condiciones de implantación de un emplazamiento de acuicultura en el corazón de una monarquía sagrada, entre el soberano y los representantes del Estado malgache y de la empresa multinacional en cuestión. La regulación estatal nacional fue suplantada, en este caso, por las iniciativas, tanto de actores supranacionales (Banco Mundial, holdings, movimientos religiosos reformistas) como locales (grupos plebeyos y nobles autóctonos, asociaciones de migrantes y ramas dinásticas rivales), llegando el rey de Antankarana hasta el punto de imponer tabúes religiosos y organizar rituales de aflicción para oponerse a la instalación. Este enfoque de la globalización contemporánea pone de manifiesto el modo en que la mercantilización del medio ambiente y la apropiación privada de la tierra genera una reconfiguración del conflicto de los poderes políticos, tanto a escala nacional como a escala local, por conquistar el aparato del Estado y el control de las poblaciones y de los recursos territoriales.

Palabras clave: Madagascar, monarquía sagrada, mercantilización, infrapolítica

Afortunadamente, la isla de Madagascar no es famosa ni por sus conflictos armados ni por sus guerras civiles. En realidad, en las tres ocasiones en que la población malgache derrocó a su Gobierno en 1972, 1991 y 2001, lo hizo de un modo más o menos pacífico, mediante la convocatoria tanto de manifestaciones masivas como de huelgas generales no violentas, ambas acciones eminentemente urbanas y fuertemente ritualizadas y apoyadas

por los líderes religiosos (Urfér, 1993). Como excepción, durante las elecciones presidenciales de 2001 los enfrentamientos entre los seguidores de los dos contendientes, Ratsiraka y Ravalomana, se saldaron con más de sesenta víctimas mortales en un año¹ (Raison-Jourde & Raison, 2002; Roubaud, 2002). Actualmente (2009) se está viviendo un nuevo periodo de tensión política que sigue la misma pauta que las anteriores. Aunque el ejército ha acabado negando el apoyo al presidente de la República y propiciando su destitución, en el momento de redactar este artículo la crisis se mantenía aún sin un desenlace previsible.

En cualquier caso, un determinado juego de fuerzas recíprocas ha sido el rasgo común de la política malgache durante los últimos veinte años: los representantes del Estado han utilizado y manipulado a las iglesias cristianas y a las antiguas realezas sagradas y jefaturas para que hiciesen de mediadores de su soberanía sobre la población local, del mismo modo que las iglesias cristianas y las realezas y jefaturas malgaches utilizaban y manipulaban a los representantes del Estado para reforzar su autoridad tradicional sobre la población local. Puede argumentarse que ha sido, en parte, este doble proceso de mediación dialéctica (de arriba a abajo y de abajo a arriba) lo que ha garantizado que los conflictos poscoloniales en Madagascar hayan sido de naturaleza eminentemente pacífica.

Por esta razón nos referiremos aquí a los aspectos políticos y a las racionalidades inherentes a este tipo de mediaciones, haciendo especial hincapié en la que va de abajo a arriba, a través del estudio de un caso práctico: la descripción y el análisis de las negociaciones comerciales recientemente llevadas a cabo en Madagascar bajo el patrocinio del Estado malgache, y en las que intervinieron el rey antankaraña Tsimiaro III y los representantes de una compañía multinacional malgache (Berger, 2006).

EL CONFLICTO Y SU CONTEXTO LOCAL

El núcleo de este artículo está relacionado con las negociaciones entre la población local malgache y las empresas de capital multinacional interesadas en invertir en territorio malgache de la mano del Estado malgache (y con su participación). Las empresas deseaban instalarse en una área determinada, propiedad del Estado malgache, que se encontraba muy cerca de unos lugares sagrados dedicados a la realeza antankaraña y a cultos ancestrales. Estos lugares sagrados eran, concretamente, unas *doany*, palabra que designa aquellas ciudades en las que ha vivido históricamente un soberano antankaraña y en las que desde entonces existe un *valamena* (patio sagrado) y un *zomba* (palacio real de los espíritus difuntos). Además, el lugar estaba situado al comienzo de la cadena montañosa coralina de Ankarana, que en varias ocasiones a lo largo de los siglos había servido al pueblo antankaraña como una protección natural ante los invasores, y cuyas

cuevas servían de cementerio a sus más antiguos reyes y nobles. Finalmente, esta zona se encontraba cerca de unas aldeas de pescadores y agricultores, la mayor parte de los cuales eran dirigidos políticamente (en las asambleas locales) y religiosamente (Islam shafíta, culto a los ancestros) por representantes del rey antankaraña.

El rey, Tsimiario III, había participado activamente en las diferentes fases de estas negociaciones y había discutido las “condiciones” con los representantes de las multinacionales, que estaban impacientes por llegar a un acuerdo. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones, el comportamiento del rey de los antankaraña fue incomprensible para los expertos internacionales encargados de iniciar la puesta en marcha del proyecto. Estos expertos habían recibido de la empresa el doble encargo de obtener el acuerdo del rey y de conseguir la participación activa de la población local en el “proyecto de desarrollo”. Por un lado, los expertos afirmaban que, a través de una filial del Banco Mundial llamada The International Financial Company (SFI), podían solicitar financiación para la puesta en marcha de una piscifactoría destinada a la cría de langostinos. El proyecto contemplaba la construcción de un centro de incubación, una planta de embalaje, una estación de bombeo y unos cuantos criaderos. Por otro lado, el reino antankaraña alardeaba de haberse establecido en esa parte septentrional de la isla desde el siglo XVIII, y del hecho de estar allí representado mediante un vasto número de subordinados entre los que se contaban, distribuidos por diferentes pueblos y ciudades del reino, varios centenares de representantes y asesores tanto plebeyos (*manantany, fabatelo, rangahy*) como nobles (*andriana, anadoany*). Además, se aferraba a su derecho “consuetudinario” de permitir o denegar la instalación y alojamiento de gente nueva, aduciendo que la antigua fundación del reino y las prácticas rituales a ella asociadas (cultos de posesión –*fisehaña, tromba antandrano*–; las ceremonias musulmanas de la orden shadhili –*arobaïny, ziara*– y los rituales reales –*jôro ny lakopy, tsangan-tsaiñy*– estaban estrechamente vinculadas con los lugares sagrados (*doany, valamena, ôrimbato*) existentes en aquella parte de costa.

Por consiguiente, en el transcurso de estas negociaciones se produjo un encuentro de diferentes entornos sociales: el entorno cosmopolita de los expertos y empresarios, el entorno del sistema estatal malgache, el entorno del aparato monárquico antankaraña, así como el entorno de la población local. Los equívocos que condicionaron las interacciones que se establecieron entre todos estos entornos sociales son visibles en la tormentosa evolución del primer año de negociaciones. La larga lista de momentos críticos que las negociaciones tuvieron que afrontar incluye el ya mencionado comportamiento incomprensible por parte de Tsimiario III, así como los varios incidentes que de ahí resultaron, algunos de ellos cómicos e, incluso, surrealistas. Mencionaremos dos ejemplos. El primero fue cuando ya se había terminado de construir el campamento que tenía que albergar al equipo encargado de dirigir la construcción de la piscifactoría, y el rey ordenó su demolición alegando que la línea del tejado no estaba correctamente orientada (la habían orientado siguiendo el eje Este-Oeste, como las tumbas de la zona,

mientras que las casas debían estar orientadas a partir del eje Norte-Sur). El segundo fue cuando, poco antes de que los ingenieros y ejecutivos de la compañía constructora se dispusieran a sobrevolar la zona para elaborar un presupuesto para las obras de nivelación del terreno, el rey promulgó un *fady* (tabú) prohibiendo que los helicópteros volaran por encima de aquel lugar.

En suma, a medida que avanzaban las negociaciones, el comportamiento del soberano fue cambiando progresivamente desde un apoyo indiscutible y una colaboración total a un boicot de las obras de prospección y construcción del futuro emplazamiento, para a continuación pasar a una oposición radical expresada en términos mágico-religiosos, que alcanzó su punto culminante con la ejecución de un ritual público ancestral de maldición que pretendía afectar a todos los trabajadores locales y a cualquier persona asociada con el proyecto. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA INCOMPRESIÓN

En su primera visita, los expertos fueron muy bien recibidos por el rey. Este clima apacible inicial fue truncado poco después, cuando el rey prohibió los trabajos de un grupo de ingenieros locales a causa de su origen étnico: eran originarios de Merina, la región central montañosa del país. Más tarde, el desencuentro desembocó en el inicio de una campaña de acusaciones difundidas por la radio, y que recomendaban hacer boicot a los representantes de la compañía. El acuerdo inicial entre ambas partes, ratificado por el rey, estipulaba el respeto a los lugares sagrados, el reclutamiento masivo de antankarañas y el pago de 150.000 dólares a la asociación local Ankarabe, de la que el rey era el presidente de honor. Sin embargo, este acuerdo generaba malentendidos cada vez más difíciles de desactivar, y fue pronto totalmente ignorado por el monarca, que no ingresó el cheque en el banco ni inició la lista de visitas a las instalaciones que habían sido programadas por la sede central de la empresa. Además, después de haber criticado abiertamente la orientación Este-Oeste de los tejados del campamento, y de haber intentado demolerlos, amenazó con solicitar una reunión con el presidente de la república para pedirle que detuviera las obras.

Poco después, el rey inició una serie de visitas a las aldeas para darles a conocer sus acusaciones a la compañía. Estas mismas acusaciones fueron también transmitidas por escrito a los ministerios malgaches competentes (el Ministerio de Medio Ambiente, el de Pesca y el de Recursos Naturales), protestando airadamente en contra de la autorización de los trabajos. Acusaba a la compañía, entre otras cosas, de contaminar y destruir lugares sagrados, de no respetar las prohibiciones ancestrales y de planificar la expulsión de la

gente de sus casas y de los lugares donde tenían su sustento. Por su parte, los expertos contratados por la empresa se habían formado ya una opinión acerca del comportamiento de Tsimiaro: una primera lectura hacía recaer el comportamiento del rey en su voluntad de presionar al máximo para obtener más dinero, pues durante las negociaciones llegó a pedir hasta dos millones de dólares en metálico. Supuestamente, el rey, una vez que se había dado cuenta del volumen de inversión financiera de la compañía y de las perspectivas de beneficio que de ella cabía esperar, estimaba que la parte del pastel que iba a corresponderle no era lo suficientemente importante.

Sin embargo, esta interpretación no era suficientemente convincente porque no encajaba con lo que seguía sucediendo ante sus ojos: el rey no ingresaba en el banco los cheques que ellos le pagaban, convocaba reuniones para decidir el uso colectivo de los fondos concedidos por la compañía –construir una carretera, un puente, una biblioteca, hacer reformas en una escuela, un hospital, una mezquita– y estaba especialmente preocupado por el estatus jurídico de las tierras que la compañía deseaba comprar y adquirir al Estado. Por consiguiente, lo que parecía estar en juego eran los términos y condiciones para adquirir la tierra y para instalar a nuevos pobladores en la zona. De hecho, para el rey el verdadero motivo de estas negociaciones era la naturaleza contemporánea del poder de la realeza antankaraña.

LA TIERRA: MARCO LEGAL Y MARCO RITUAL

Desde la independencia de la isla, en 1960, el poder monárquico era fundamentalmente religioso, tanto desde el punto de vista de los castigos que aplicaba como de su legitimidad para provocar o para impedir algo gracias a la fuerza invisible de los ancestros reales (los *zafinifotsy*). Los principios en los que se basaba su poder –los derechos del primer ocupante (*tômpontany*) y la necesidad de aprobación de los ancestros– formaba parte del “sentido común” compartido por la mayoría de la población. Este sentido común, basado en la concepción tradicional sobre la tierra, era también apoyado por el Estado malgache. Ambas instituciones estaban realmente relacionadas: el Estado daba al rey la capacidad de garantizar localmente el orden y la ley social, de influir en las ofertas de trabajo proporcionadas a la población de la región, y de ejercer su peso en las opciones electorales de los agricultores, de los pescadores y de los ganaderos de la zona. El Estado transigía en todo esto porque reconocía en el rey y sus representantes el estatus de *tômpontany*, es decir, el de primeros ocupantes y dueños de la tierra. Esta condición los convertía en responsables de una tierra que, en lo esencial, seguía estando bajo la autoridad de los ancestros que la habían domesticado. En tanto que descendientes de los primeros ocupantes, el rey y sus

representantes distribuían, a través de los ritos, la fuerza vital canalizada y transmitida por dichos ancestros (*hasiñy*). Esta fuerza vital, esta clase de energía, supuestamente garantizaba la fertilidad del suelo, la fertilidad humana y de las especies animales y vegetales, así como la prosperidad de la población que vivía de ellas.

Por una parte, si la gente asignaba al rey tales poderes, ello era debido a que el rey encarnaba la existencia de un amplio marco político-religioso, cuyos representantes estaban repartidos por las aldeas y ciudades de la zona, y asumían el estatus de primeros ocupantes (*tômpontany*). Por otra parte, si los representantes del Estado malgache, sancionando este orden de cosas, habían asignado al rey una posición tan influyente en tanto que mediador y representante de las poblaciones locales, era debido a que querían mantener un estatus particular de la tierra y unas condiciones locales específicas de gestión, uso y control de los recursos que se extraían de ella (fauna, flora, campos, bosques). De hecho, prácticamente no existe un título oficial ni unos límites de las tierras sancionados por la ley en los medios rurales. El acceso a las tierras cultivables tiene lugar y es básicamente controlado por medio de unos lazos de parentesco en los que la noción de precedencia ancestral desempeña un papel importante. Para los recién llegados, los derechos de asentamiento en el territorio y de usufructo de la tierra son dispensados también de esta forma ritual, puesto que es la que goza de reconocimiento práctico por parte de los que serán sus vecinos. Del mismo modo, las personas que se instalan en las nuevas tierras y entierran en ellas a sus muertos, pueden, a su vez, considerar a sus futuros descendientes como *tômpontany*, es decir, como poseedores de los derechos, a la vez dueños y responsables de la tierra y del lugar. La consecuencia principal de esta forma de adquirir derechos sobre la tierra a base de enterrar en ella a los parientes es que, en un contexto de grandes migraciones, el orden social establecido y el poder real que lo representa manifiestan una gran fragilidad. Efectivamente, todo el sistema se basa en el mantenimiento de una serie de vínculos de parentesco entre los clanes de la realeza antankaraña y la población autóctona.

Durante el periodo colonial se produjo el establecimiento de un gran número de inmigrantes que, además de carecer de vínculos de parentesco con la monarquía, profesaban otras religiones o vías de salvación (cristiana, musulmana) independientes a la sugerida por los ancestros de la realeza (*zafinitotsy*). Además, estas migraciones fueron acompañadas por una gradual comercialización y monetarización de las actividades de producción e intercambio de mercancías y servicios, lo que contribuyó a transformar todavía más profundamente la estructura de las familias residentes, tanto en su tamaño como en la profundidad genealógica. En el medio urbano, y en los medios rurales cercanos a las minas de zafiro o a las zonas de pesca de langostinos, comenzaron a aparecer diferentes grupos y/o asociaciones registradas legalmente cuya lógica de pertenencia no se basaba en los vínculos político-religiosos con la red de representantes de la realeza extendida por el territorio, sino en otros criterios como las religiones e iglesias, o las

diferentes actividades profesionales —como las asociaciones tradicionales de pescadores—, o incluso asociaciones de inmigrantes cuyo fin principal era asegurar la repatriación de cadáveres a la tumba familiar de origen.

El rey Tsimiaro III era consciente, a su manera, de todos estos cambios, e intuía que la creación por parte de los inmigrantes de asociaciones que negaban la importancia de la aprobación real ancestral, minaba la legitimidad de la institución monárquica y amenazaba su pervivencia en el futuro. Posiblemente por eso el rey se había preocupado de ampliar su red de representantes nobles, ligados a él por vínculos de parentesco, una red paralela e igual de tupida de representantes plebeyos, es decir, de miembros de familias que, aunque llegadas mucho más tarde que los primeros ocupantes, se habían decidido a asentarse allí y enterraban allí a sus muertos. En este contexto, el proceso de liberalización y democratización de la República Malgache, iniciado en los años noventa, ofreció un marco idóneo para canalizar recursos procedentes de los donantes internacionales hacia proyectos orientados al desarrollo comunitario local. El marco legal malgache se adaptó también a estos nuevos tiempos. Por un lado, una ley creó la figura de “comunidades de base”, pensadas para dar entidad jurídica a los diferentes actores locales del desarrollo. Por otro lado, se descentralizó la gestión de los llamados recursos renovables (bosques, fauna y flora silvestre, acuática y terrestre, recursos hídricos, etc.). En la práctica se estaba proporcionando un marco legal adecuado para que las “comunidades de base” tuvieran la gestión de dichos recursos locales (GELOSE, “Gestion Locale Sécurisée”).

Los nobles antankaraña que estaban bien situados en cargos de la administración del Estado central reaccionaron con prontitud: en 1997 crearon, conjuntamente con el rey, una comunidad de base con el nombre de Comunidad Ankarabe. Como los vientos soplaban en dirección a valorizar lo local, el rey fue nombrado presidente de honor de la misma. De hecho, esta comunidad de base no nació de la nada, fue tan sólo la actualización y revitalización de un modelo administrativo ya existente: la *fokontany*, que había sido la estructura administrativa local mediante la cual la III República malgache había querido movilizar e integrar en las estructura del Estado a las sociedades rurales. A finales de los noventa, sin embargo, estas estructuras estaban muy anquilosadas, y sólo se reunían para llevar a cabo rituales monárquicos y, excepcionalmente, también para resolver problemas de herencia.

El nuevo contexto permitía reconvertir la estructura jerárquica del reino en una “comunidad de base”. Así, mediante una serie de encuentros regulares con la población, donde se discutían diferentes asuntos de la vida cotidiana, y tras el establecimiento de un sistema representación local que conectaba las aldeas con los centros administrativos más grandes, se puso en funcionamiento lo que se presentó ante los agentes de la comunidad internacional como una muestra de la movilización y la participación de las comunidades locales en pos del desarrollo local. Fue como matar dos pájaros de un tiro; por un lado, bajo el paraguas legal que ofrecía una figura como la “comunidad de base”, se revitalizó

la red de influencias locales que se estructuraba alrededor de la monarquía, y que, ante la perspectiva de asumir las nuevas competencias de gestión de los recursos naturales locales, pasó de nuevo a observar con interés la política local; por el otro, estas mismas “comunidades de base” pasaron a ser uno de los interlocutores principales de las ONG y de las empresas que querían establecerse en la zona para desarrollar sus proyectos.

NUEVAS FORMAS PARA VIEJOS CONFLICTOS

Tsimiaro III había aceptado la propuesta de sus parientes que se movían bien en los entresijos de los ministerios y de la ley estatal. Sin embargo, su experiencia le decía que cuando aquellos que viven en la capital se acercan a provincias para lisonjear a las autoridades tradicionales y encandilar a la población con proyectos de desarrollo, es que hay gato encerrado. No en vano, el rey había sido testigo de las consecuencias en que había derivado la construcción, en 1949, de una fábrica de azúcar cuya plantación de caña ocupó unas 14.000 hectáreas que hasta entonces habían estado bajo control de la monarquía. En torno a esa fábrica, y a las casas construidas para alojar a los 6.000 empleados de la misma, había surgido una ciudad de 30.000 habitantes que había atraído a gente de todo Madagascar y de las Comores. En un primer momento, la fábrica había arruinado las pequeñas plantaciones de los miembros de la realeza que habían tenido la desgracia de haberse especializado en la caña de azúcar. Y ahora, algunas décadas más tarde, después de que varios equipos de ejecutivos hubieran jugueteado un poco con los números, los saldos y las existencias, la compañía había sido privatizada: la tierra había acabado siendo vendida al capital extranjero y la población local había perdido tanto el patrimonio como el desarrollo que le habían prometido. Con este precedente en la cabeza, el rey se propuso convertirse, en primer lugar, en el garante de que la tierra no se vendiera y, en segundo lugar, en el representante de los habitantes más desposeídos de la región, entre los que se encontraban los plebeyos. Así, alargando las bases de la monarquía más allá de los estrictos lazos de parentesco que aglutinaban a la nobleza autóctona alrededor de la monarquía, Tsimiaro III pretendía consolidar su posición de rey.

Antes de que llegara la empresa que promovía la piscifactoría para la cría de langostinos, otra empresa se había interesado en construir, en ese mismo emplazamiento, una planta industrial de procesado de alimentos. El rey había negociado un acuerdo con los representantes de este primer proyecto, en el que se trataba de la titularidad de las tierras, de los rituales que se iban a organizar con el apoyo de la empresa, del compromiso del asfaltado de las carreteras para mejorar la comunicación entre la capital del reino y los lugares más comunicados –incluyendo el regalo de un Peugeot 606 para uso del rey–,

etc. La última cláusula, aunque no la menos importante, preveía la asignación a los miembros de la familia del rey de puestos clave en los grupos de recogida de mariscos y pesca costera en la bahía de Ambilobe. El propio hijo del rey sería nombrado “director del proyecto”. Esta misma empresa gozaba ya de un cuasi monopolio sobre este tipo de actividad en las aldeas del litoral al sur de Ambilobe, incluida la región de Beramanja. Esta presencia consolidada de la empresa en esta región permitía al rey albergar esperanzas en recuperar el control sobre una vieja dinastía rival que se asentaba en Beramanja, y que desde el siglo XIX había conseguido un cierto estatus independiente del reino. Ahora, el rey quería aprovechar la alianza con esta empresa, y el control de su estructura productiva en el ámbito local, para recuperar el favor de la población en aquella zona y ver reconocida de nuevo su supremacía política sobre Beramanja. Así, el rey tenía la expectativa de que del proyecto saliera un reino ampliado, más cohesionado, con sus tierras legalmente reconocidas como “ancestrales”, y fortalecido por la estabilidad de una empresa económicamente sólida.

¿Por qué no funcionó este ingenioso plan? ¿Por qué la buena sintonía inicial con los expertos que promovían la piscifactoría se acabó degradando hasta el distanciamiento y la incomprensión que hemos reflejado al principio? Para comprender el comportamiento del rey y su cambio de actitud, basta saber que, inicialmente, no se dio cuenta de que, en un momento dado, había dos empresas diferentes compitiendo entre sí. Él pensaba que todos los expertos que venían a negociar con él estaban contratados por una misma empresa y, por tanto, eran ellos los que se contradecían en cada reunión. Ahora bien, más allá de este error, había un complejo conflicto político en liza dentro de la propia monarquía. Para comprender la mezcla de racionalidades que se dio hemos de referirnos a dos niveles de causas diferentes: El primer nivel tiene que ver con lo que sucedió en la política estatal durante los años que precedieron a la llegada de las dos empresas. En paralelo a la progresiva descentralización administrativa que los estados africanos emprendían, siguiendo el camino marcado por la comunidad internacional, también se aconsejaba a los estados africanos que establecieran una serie de recursos estratégicos nacionales –aquellos que más interesaran al mercado internacional– y cuyos ingresos serían recaudados directamente por el Estado.

En Madagascar el langostino fue uno de estos recursos considerados estratégicos y, por tanto, cualquier decisión sobre ellos quedaba fuera de la competencia de las “comunidades de base”. Además, el Estado malgache siguió el consejo de sus asesores financieros internacionales para crear un mercado de derechos de pesca canjeables que, con el tiempo, fuese accesible a la competencia internacional, y se pudieran incrementar así tanto los precios como las cargas impositivas ligadas a estos derechos de pesca. Todo este entramado era conocido por la nobleza ankaraña asentada en los ministerios, que fue la que empañó y desactivó el proyecto del rey Ankaraña. La llegada de la compañía rival que, financiada por una filial del Banco Mundial, estaba dispuesta a comprar las tierras

legalmente dependientes de Ankarabe a un precio superior, no hizo más que precipitar los acontecimientos. Las incoherencias del rey corresponden al momento inicial, momento en que no se dio cuenta que había llegado una nueva compañía, y siguió tratando a los segundos como si fueran unos comisionados de la primera compañía con la que ya había firmado un acuerdo. Este fue el periodo en que el rey se indignaba y promovía campañas que acusaban a la compañía. Ahora bien, después, se dio cuenta de su error —o se lo hicieron ver— y continuó negociando con la segunda empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no se limitó el rey a decir a la segunda empresa que, lamentablemente, ya había contratos en vigor en relación con la explotación de la tierra y la pesca, y continuar así su plan inicial con la primera empresa? La repuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo: es sencilla porque el rey hizo lo que hizo debido a las presiones que recibió para hacerlo; es compleja por la naturaleza de estas presiones que le obligaron a negociar con la segunda empresa. Para ello necesitamos conocer el segundo de los niveles a los que hemos hecho referencia.

Este segundo nivel que puede aportar luz a nuestra historia tiene que ver con un rasgo muy recurrente de la historia de la monarquía antankaraña: las rivalidades entre hermanos dentro de la familia real (*ady longo*) y la continuidad de esta rivalidad a través de su descendencia, es decir, de la rivalidad entre primos. En 1820 ocurrieron una serie de luchas internas cuyas consecuencias todavía tienen vigencia en la actualidad. En resumen, lo que pasó fue que la línea de sucesión del rey Boanahajy fue desbancada por el hijo de su hermana, Tzialana, con la ayuda del hijo de su hermano, Andrianjalahy. En otras palabras, cuando el hijo de Boanahajy hubo heredado el trono, fue desposeído del mismo por sus primos —tanto por parte de su tío paterno como por parte de su tía paterna— que cedieron su puesto a un descendiente de Tzialana, alegando que los descendientes de las mujeres tienen precedencia en las sucesiones reales. En este cambio en la línea de sucesión del reino se encuentra el origen de la distinción que todavía hoy separa a los nobles antankaraña: los hijos de los hombres (*zanakalahy*), descendientes de Andrianjalahy, que desde entonces viven en Beramanja —la famosa dinastía que Tsimiaro trató de reintegrar bajo su protección—, y los hijos de las mujeres (*zanakabavy*), descendientes de Tzialana, que son los que forman el clan Antandrona, entre cuyos miembros se nombran a los legítimos pretendientes al trono. Efectivamente, poco después de la constitución de la “comunidad de base” Ankarabe —impulsada por los nobles y presidida por el rey—, se produjeron graves desacuerdos internos. En superficie, estos desacuerdos respondían al control en la toma de decisiones de la asociación, pero todo el que fuera conocedor de la historia del reino sabía reconocer, de fondo, los ecos de las mismas rivalidades dinásticas entre hermanos del pasado. Determinados primos de Tsimiaro III —descendientes de los 3 hermanos que protagonizaron el “golpe” de 1820— que ocupaban cargos influyentes, ya fuera en la administración del estado o entre los representantes del rey distribuidos por el territorio del reino, querían marcar unos límites claros a la capacidad de decisión del rey sobre los asuntos de la asociación.

Lo que estaba en juego no era solamente el conflicto sucesorio heredado del pasado, sino también el modelo de sociedad que ansiaban construir en el futuro con la ayuda de la riqueza generada por las inversiones de capital internacional en su territorio. El pasado ponía principalmente la forma que tomaba el enfrentamiento, pero los contenidos del mismo eran esencialmente sobre los proyectos de futuro, tanto políticos como económicos. Por un lado, el rey y sus consejeros plebeyos deseaban desarrollar el reino en forma de una comunidad étnica secularizada. En otras palabras, este grupo quería aprovechar la nueva cobertura legal encontrada en la figura de la “comunidad de base”, para desmarcarse de los parientes de sangre cuyos derechos se basaban en su capacidad de oficiar determinados cultos ancestrales. Por su parte, esta aristocracia, bien insertada en la administración del Estado, aspiraba a un desarrollo local bien integrado en la construcción del Estado-nación malgache. Pretendían aprovechar el prestigio procedente de los éxitos en su región de origen para postularse en su carrera política a escala nacional, no ya como aristócratas de un reino particular, sino como referentes de un reformismo social que, cubierto con el manto universalizante o bien del cristianismo o bien del islam, se presentaba como modernizador. Para los primeros, el imperativo era no vender las tierras ancestrales; para los segundos, en cambio, el imperativo era atraer inversión que las convirtiera en económicamente rentables.

DESENLACE

¿Cómo se acabó resolviendo estas diferencias de estrategia, o, lo que es lo mismo, quien acabó parando lo pies al rey Tsimiaro III? Fue un primo suyo, hijo de la hermana de su padre —es decir alguien con una posición preeminente en el linaje—, que además de general del ejército malgache era director de la Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS), e instigador de la idea de fundar una “comunidad de base” tal como estipulaba el nuevo marco legal. La nobleza jugaba a dos bandas, pues se encontraba tanto dentro de la empresa, en tanto que representantes del Estado, como dentro de la “comunidad de base” que ellos mismo habían impulsado.

La propia empresa encomendó a miembros de la nobleza que, paralelamente a la continuación de la interlocución con el soberano, establecieran una buena relación con los representantes de las aldeas situadas junto al lugar del proyecto. Así fue como se acabó formando una comisión de nobles del reino cuyo objetivo era encontrar una salida a las incomprensiones mutuas. Esta comisión de nobles organizó, en colaboración con las principales administraciones del Estado, el establecimiento de un censo de los principales lugares sagrados de la zona. Este registro respondía a la voluntad de concretar

las acusaciones del rey en contra del proyecto, pues incluía todos aquellos lugares que, al haberse infringido las prohibiciones que pesaban sobre ellos, habrían sido mancillados por las obras. Además, también prepararon, con la colaboración de la población local, un ritual para permitir la instalación de la empresa y para que ésta pudiera iniciar las obras de excavación de los cimientos (*jôro vaky lañitry*). El rey boicoteó este ritual, argumentando que había sido oficiado por miembros de una rama dinástica rival, y denunció así que la comisión de nobles, que se había creado para ser un elemento conciliador, acabase teniendo una agenda propia y se instituyese de facto como un contrapoder importante. Ante este orden de cosas, el rey organizó, por su parte, un ritual de maldición contra la compañía y todos sus colaboradores, tanto locales como extranjeros (*jôro tsidroño aomby*). Finalmente, la rama dinástica rival que controlaba el comité de nobles preparó, en connivencia con la administración provincial, un complot para derrocar al gobierno real, hacerse con el control de la asociación legal que representaba al reino antankaraña, y negociar directamente con la empresa los términos y las condiciones para la instalación de la piscifactoría. En septiembre de 2004, los medios de comunicación anunciaron la destitución del rey antankaraña Tsimiario III por su pueblo, y su definitiva revocación ritual.

Los nobles antankarañas, responsables de estas explosivas noticias, justificaron sus acciones alegando unas “razones esenciales e imperdonables”: el soberano era acusado de haber echado a perder (*robaka*) el espíritu de solidaridad parental y el apoyo mutuo (*fibavañana*) del pueblo. También era acusado de no respetar las tradiciones más fundamentales de los antankaraña (*fombandrazaña*), y de coartar el desarrollo rápido y sostenible del área (*fampandroasana haingana sy maharitra*). Como vemos, alegaron razones que se enmarcaban dentro del “sentido común” predominante en la zona. Sin embargo, durante más de veinte años, ese mismo rey había oficiado una serie de rituales importantes a escala de todo el reino; había desempeñado un papel privilegiado de mediación con diversas empresas y organizaciones no gubernamentales; había apoyado públicamente a importantes personalidades del Estado malgache poscolonial y, en última instancia, durante todos aquellos años había representado públicamente ante todos los malgaches la invulnerable renovación y vitalidad de las tradiciones ancestrales. Pero a lo largo del conflicto aquí expuesto, sus rivales políticos consiguieron desplazarle de esta posición central y mediadora entre los dos campos —el dinástico y el estatal— que pasaron a ocupar ellos mismos. Finalmente, a Tsimiario III sólo le quedó, como último recurso antes de ser destituido, la amenaza de la magia y las maldiciones.

Lo que los expertos no sabían, pues, era todo este trasfondo que ayudaba a contextualizar tanto los malentendidos como las rivalidades y tensiones en el seno de la “comunidad de base” con la que trataban. Más que un hombre contradictorio e irracional, Tsimiario III fue alguien que luchó una dura batalla política en dos frentes paralelos, cuyo lenguaje y simbolismo se reforzaban entre sí, y lo hizo siendo consciente de que se jugaba su futuro como rey de Antankaraña.

Nota

1. Sin embargo, al menos cuarenta de ellas fueron abatidas por error: una noche, un grupo de soldados y otro de civiles militarizados que estaban supervisando los mismos controles de carretera, creyeron que estaban siendo atacados por sus oponentes y, desgraciadamente, se mataron unos a otros.

Referencias bibliográficas

BERGER, L. "Les voix des ancêtres et les voies du développement. Les populations de l'Ankaraña en butte à la mondialisation". *Etudes Rurales*. No. 178 (2006). P. 129-160.

PERROT, C-H. & F.FAUVELLE-AYMARD. *Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine*. Paris : Karthala, 2003.

RAISON-JOURDE, F. & RAISON, J.P. (eds.) "Madagascar, les urnes et la rue". *Politique africaine*. No. 86 (2002).

ROUBAUD, F. (ed.). "Madagascar après la tourmente: regards sur dix ans de transition politique et économique". *Afrique Contemporaine*. No. 202-203 (2002).

URFER, S. "Quand les Églises entrent en politique". *Politique africaine*. No. 52 (1993). P. 31-39.